



NARCOTRÁFICO Y OPINIÓN PÚBLICA. MITOS Y REALIDADES

Raúl Benítez Manaut¹

Opinión pública y opinión especializada. La brecha

En México se da una distancia notable entre la llamada “opinión pública”, medida a través de encuestas a población abierta, y la opinión de la sociedad civil organizada respecto de la estrategia del presidente Felipe Calderón. La sociedad civil está organizada en movimientos de víctimas, organizaciones no gubernamentales, la academia, los empresarios, el clero y los medios de comunicación. Incluso, la opinión de algunos académicos extranjeros y *think tanks*, sobre todo los de Estados Unidos, también repercute en México y es transmitida a la población mexicana. En casi todos estos sectores predominan las críticas al gobierno de Calderón y a su estrategia de combate al narcotráfico. A esto le llamamos una brecha insalvable. Así, el presidente Calderón tiene el apoyo de la ciudadanía y los especialistas lo condenan.

Todos estos elementos fueron captados por la Encuesta *Ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia (CIDENA) 2011*. Esta última es un instrumento no de coyuntura, sino que aporta información valiosa para antropólogos, psicólogos, sociólogos y expertos en medios masivos de comunicación. La encuesta es una fotografía del impacto del narcotráfico y sus acciones en la opinión pública en 2011, a cinco años de haberse implementado la estrategia de “guerra contra el narcotráfico” por el presidente Felipe Calderón.

¹ Investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y presidente de CASEDE.

Como político, a pesar de los cuestionamientos, si el presidente Calderón cuenta con una opinión favorable entre la población sobre la gestión de su gobierno, esta es una razón importante para saber por qué no se vislumbra un cambio en la estrategia seleccionada. Él no percibe esa necesidad, ni siquiera por motivos electorales. Ante la cercanía del proceso electoral de julio de 2012, ninguno de los aspirantes a la Presidencia con posibilidades de participar de forma importante en la carrera ni ha elaborado una opción alternativa para el combate al narcotráfico, ni ha criticado los instrumentos principales empleados por el presidente Calderón, como lo son las fuerzas armadas. Los tres candidatos presidenciales con posibilidades de acceder al poder en México en 2012, Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota, coinciden en la continuidad de la presencia de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico, y los tres señalan la misma estrategia para su retiro. Afirman que será cuando existan cuerpos policíacos con las capacidades, el tamaño y la eficiencia para que puedan sustituir el despliegue de la milicia. Ninguno señala periodos probables de tiempo y menos aún se han mencionado estrategias alternativas a la instrumentada por el presidente Calderón.

Opinión pública y seguridad. Experiencias internacionales

En América Central, en los años ochenta, al estallar los conflictos civiles, los movimientos armados revolucionarios incrementaron su accionar para enfrentar a los gobiernos militares que tenían una práctica de ejercicio del poder basada en la represión y las notables violaciones a los derechos humanos. Segmentos importantes de la población respaldaron a estos gobiernos. Otros apoyaron a las guerrillas, con diferencias visibles entre los países. En El Salvador, la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) fue apoyada por un sector de la población, y nunca bajó del 30 por ciento del voto a su favor en los sucesivos procesos electorales después de firmada la paz en 1992. Por su parte, el partido de extrema derecha, ARENA, firme aliado de las fuerzas armadas, logró gobernar desde 1989 hasta 2009, también con un amplio respaldo de la ciudadanía. En Guatemala la izquierda siempre ha sido muy débil electoralmente, y los partidos de derecha, muchos de ellos cercanos a las fuerzas armadas, a pesar de ser público que en el pasado éstas fueron culpables de graves violaciones a los derechos humanos, han recibido el respaldo de la población. Ello llevó a un general retirado, Otto Pérez Molina, a la Presidencia de Guatemala en enero de 2012. En Colombia sucedió algo parecido durante los últimos diez años. La población dió un amplio voto de confianza al presidente Álvaro Uribe durante todo su gobierno. Al terminar su gestión en 2010, de forma impresionante gozaba de más de 70 por ciento de las simpatías populares, debido a la instauración de la llamada Política de Seguridad Democrática, mediante la cual pudo someter a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y lograr extender la idea de que se trata de una agrupación narcoterrorista a la que había que derrotar con todos los medios a su alcance.

Por otro lado, en Estados Unidos se observan fenómenos similares. Cuando las Torres Gemelas fueron atacadas por células del grupo terrorista *Al Qaeda* el 11 de septiembre de 2001, el presidente George W. Bush desplegó una amplia campaña mediática muy exitosa,

cuyo objetivo era obtener el apoyo de la población para elaborar su estrategia de contención del nuevo enemigo. En lo interno, un mes después logró la aprobación del Acta Patriótica en el Congreso y elaboró la nueva doctrina de seguridad basada en la llamada *Homeland Security* (seguridad de la patria); y en lo externo logró amplios respaldos en la comunidad internacional para aplicar su estrategia contra el terrorismo. Lo mismo sucedió en España y en otros países como Alemania, con la elaboración de leyes contra los grupos terroristas (contra la ETA, principalmente). En muchas otras naciones las llamadas políticas duras, o el empleo de los militares, han sido bien vistas por segmentos amplios de la población, en parte debido a campañas mediáticas muy bien elaboradas.

Sin embargo, en contextos de elevada participación de las fuerzas militares o policíacas en un país para enfrentar un problema de seguridad generalmente la opinión pública se divide. Eso sucede en México, con la peculiaridad de que la opinión pública respalda el empleo de las fuerzas armadas y el esfuerzo del presidente, y la opinión de los especialistas, así como la de algunos sectores políticos, académicos, grupos empresariales y otros actores de la vida nacional cuestionan ampliamente su estrategia. Por ello, México no se distingue de otros países. La población en general siempre busca seguridad y pretende que se la otorgue el gobierno, como obligación legal y constitucional, ética y moral. En México la guerra contra el narcotráfico ha atemorizado a la población, principalmente en algunos estados del norte del país. La violencia de los cárteles es vista día a día por los mexicanos a través de la televisión, y todos los ciudadanos se preocupan por la posibilidad de ser secuestrados, extorsionados o incluso de perder la vida sin motivo. En otras palabras, la población se siente inerte y con miedo. La vida cotidiana de los mexicanos ha cambiado, sus costumbres, la confianza en las instituciones y la confianza en “la calle” como un lugar público para el disfrute de la ciudadanía. Esto ha sido captado nítidamente por la Encuesta CIDENA 2011.

El contexto. El ascenso de la violencia criminal

Desde fines de los noventa del siglo xx los sindicatos criminales ya eran una amenaza para la transición democrática,² debido a que los cárteles de la droga fueron acumulando un gran poder económico, al transformarse de intermediarios de los colombianos en dueños del negocio por la posición geográfica del país.³ El narcotráfico en México fue tolerado por ambos gobiernos: el de Estados Unidos y el mexicano. Se trataba de una actividad ilegal pero activa y se realizaba sin muchos obstáculos reales desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

A inicios del siglo XXI cambia el parámetro y los narcotraficantes actúan en un terreno muy fértil por dos razones: en México existe un Estado en transición hacia la democracia, con una rotación de élites muy rápida, y Estados Unidos se concentró desde el 11

² John Bailey y Roy Godson (editores) *Crimen organizado y gobernabilidad democrática. México y la franja fronteriza*, Grijalbo, México, 2000.

³ Bruce Bagley, “La conexión Colombia-México-Estados Unidos”, en Raúl Benítez Manaut, Abelardo Rodríguez y Armando Rodríguez (editores), *Atlas de la seguridad y la defensa de México 2009*, México, 2009, p. 24.

de septiembre de 2001 en la guerra contra el terrorismo, reduciéndose el “nivel de la amenaza” del narcotráfico. Los cárteles aprovecharon que la seguridad nacional de Estados Unidos se centraba en el combate al terrorismo y se desarrollaba en otras regiones del planeta, mientras que la demanda de drogas seguía siendo el factor detonante de la actividad, sin que los esfuerzos realizados para reducir la producción y el consumo fueran exitosos. Es el caso de la producción y exportación de cocaína desde Colombia, que no ha reducido sustancialmente sus volúmenes, a pesar de la instrumentación del Plan Colombia iniciado a fines de 1998 y principios de 1999.

En su toma de posesión el primero de diciembre de 2006, el presidente Felipe Calderón le declaró la “guerra” al narcotráfico y a la par se desprendió el empleo intensivo de las instituciones del Estado propias para tal propósito, que son las militares. Lo que se está cuestionando en México es la estrategia y el resultado del instrumento empleado por esa guerra, no que se combata al narcotráfico. La mayoría de los analistas sostienen que esta declaración de “guerra” del gobierno no era necesaria, ya que al enfrentamiento existente entre los cárteles, que había provocado 8,907 muertos durante los seis años del gobierno de Vicente Fox, se suma la acción del gobierno, que incrementa a su vez la guerra entre los cárteles, en una especie de círculo vicioso, que deriva en los aproximadamente 50 mil muertos desde el inicio de la administración actual. Declarar la guerra a algo por un gobierno es muy peligroso, porque se corre el riesgo de que no se logren victorias rápidas. Cuando los gobiernos latinoamericanos declaran la “guerra a la pobreza” (y lo han hecho en múltiples ocasiones, tanto a nivel nacional como en foros multilaterales), en muy pocas ocasiones han tenido éxito. Lo mismo sucede con la guerra al narcotráfico. El problema al declarar la guerra por el presidente Calderón es que necesariamente debe emplear al aparato del Estado apropiado para enfrentarla, las fuerzas armadas, lo que deriva en un fenómeno de fortalecimiento de éstas en el seno del Estado, y en una “militarización”, sobre todo en los llamados “frentes de guerra”, que son los estados donde se observa esta violencia homicida, encabezando la estadística Chihuahua, en particular Ciudad Juárez.

Otra característica de esta guerra es su naturaleza transnacional. El narcotráfico colombiano abrió un corredor criminal y con ello una “zona de inseguridad” entre Colombia y el sur de Estados Unidos. Esta “guerra”, en el caso de los países de Centroamérica y México, amenaza los frágiles sistemas democráticos de gobierno de forma notable, debido a que provoca gran corrupción gubernamental, descomponiendo al Estado y generando un nuevo proceso de militarización.⁴ En Estados Unidos se ha definido a estos conflictos como “guerras criminales”, e implican que su naturaleza es muy diferente a las guerras contra el terrorismo.⁵ Las “guerras criminales” no son ideológicas ni buscan destruir la civilización occidental ni la economía de mercado; por el contrario, los grupos criminales internacionales se basan en las estructuras de la democracia y la globalización, y su objetivo es la acumulación de poder económico y político. Las guerras del narcotráfico en América Latina serían la versión más desarrollada de las guerras criminales, por el poder

⁴ Vanda Felbab-Brown, “Narcotics International, Inc.”, *Americas Quarterly*, primavera de 2010, p. 42.

⁵ Bob Killebrew y Jennifer Bernal, *Crime Wars. Gangs, Cartels and U.S. National Security*, Center for a New American Security, Washington, 2010.

acumulado de los sindicatos colombianos en los años noventa del siglo xx (los cárteles de Medellín y Cali), y de los mexicanos en el siglo xxi. De esta manera, en México las agrupaciones criminales más poderosas son el Cártel del Pacífico, encabezado por Joaquín Guzmán (el *Chapo*) y los Zetas.

Según el entonces vocero del gobierno de México, Alejandro Poiré, en el año 2010 la guerra entre los cárteles del narcotráfico se concentraba en 162 municipios del país (de un total de casi 2,400), y en todos los conflictos está involucrado el Cártel del Pacífico. La información señala que el 80 por ciento de los más de 28 mil muertos (hacia fines de agosto de 2010) se dan debido a los siete principales conflictos entre los cárteles de la droga. Los siete conflictos son los siguientes: 1) Pacífico vs. Juárez; 2) Pacífico vs. Beltrán Leyva; 3) Pacífico vs. Golfo-Zetas; 4) Pacífico vs. Arellano Félix; 5) Familia vs. Golfo y Zetas; 6) Familia vs. Beltrán; 7) Golfo vs. Zetas.⁶ De esta guerra, entre mil y dos mil homicidios se dieron contra víctimas inocentes, ya sea en enfrentamientos entre los cárteles, o cuando el gobierno realizaba algún operativo, y por causa de las ofensivas del gobierno, y debido a las represalias de los cárteles se generan entre 500 y mil funcionarios gubernamentales muertos, la mitad de ellos militares. De esta forma, aunque el 95 por ciento de los homicidios fueron entre criminales, el impacto entre los inocentes es elevado y es el que afecta más al gobierno en el nivel político. De este último se desprende la afirmación de que estamos frente a una guerra “fracasada” y que tiende a aumentar en violaciones a los derechos humanos.

El gobierno mexicano comenzó a ser amenazado en su estabilidad por los cárteles, debido a que fueron abriendo territorios y acumulando poder. La violencia entre los cárteles llevó a que empezara una guerra entre sus integrantes por mercados y rutas de tránsito hacia Estados Unidos. Entre los años 2001 y 2006, las ejecuciones y homicidios se dieron de la siguiente manera:

Cuadro 1
Homicidios vinculados al crimen organizado
2001-2006

Año	Número de homicidios
2001	1,080
2002	1,230
2003	1,290
2004	1,304
2005	1,776
2006	2,221
Total	8,901

Fuente: “Drug Violence in Mexico, Data and Analysis from 2001-2009”, Trans-border Institute, University of San Diego, 2009.

⁶ “80% de las ejecuciones ocurrieron en 162 municipios”, *El Universal*, México, 27 de agosto de 2010.

En otras palabras, se da un crecimiento de la modalidad de realizar asesinatos entre las bandas rivales como medio de competir por los cargamentos de cocaína, proveniente de Colombia, marihuana y amapola (básicamente de Sinaloa), y recientemente anfetaminas y sus precursores, provenientes de China. Si la tendencia actual continúa, el sexenio del presidente Calderón culminaría con más de 50 mil homicidios provocados por la acción del crimen organizado y en menor medida por la reacción del Estado. Por este clima de inseguridad es que podemos afirmar la hipótesis de que la guerra entablada entre las siete grandes organizaciones criminales que actualmente existen en México es la principal amenaza a la democracia. Si se compara esta cifra con su aumento durante el actual gobierno del presidente Felipe Calderón, se da un crecimiento de cinco veces el nivel de homicidios, como se observa en el Cuadro 2:

Cuadro 2
Homicidios vinculados al crimen organizado
2007-2011

Año	Número de homicidios
2007	2,275
2008	5,219
2009	6,587
2010	11,583
2011	12,366
Total	38,030

Fuente: “Ejecutómetro”, *Reforma*, 12 de enero de 2012.

El reclamo de información y las críticas a la guerra

Las opiniones están polarizadas. Hay quienes postulan que el Estado “no puede” ante el poder de los grandes cárteles y que las instituciones han sido penetradas, ante lo cual habría que dar un giro total de la estrategia.⁷ A la par, algunos proponen que se deberían realizar cambios de ley que tiendan a la legalización del consumo de algunas drogas ligeras

⁷ Rubén Aguilar V. y Jorge G. Castañeda, *El narco: la guerra fallida*, Santillana, México, 2009.

como la marihuana, y no considerar delincuentes a los consumidores.⁸ En el otro extremo, el propio gobierno impulsa la “mano dura”, a través de las fuerzas armadas y de las policías federales; elabora diagnósticos que señalan que el aumento de la violencia es pasajero, que se llegará a un pico y que el desmembramiento de los grandes cárteles poco a poco redundará en mayor seguridad, disminución de las tasas de violencia, y que se recuperarán las capacidades de gobernabilidad.⁹ En realidad ningún diagnóstico ha sido lo suficientemente contundente para saber si se está ganando o perdiendo la “guerra”, pues claramente el debate no ha pasado a un escalón analítico superior y sólo pone el énfasis en el factor de violencia homicida entre los cárteles como elemento de medición. El propio presidente Calderón, a mediados de 2010, en un cambio radical de su discurso (no en la implementación de las estrategias del gobierno), señala que el combate a los cárteles es para lograr la “seguridad pública”.¹⁰ Este cambio de timón discursivo se debió a la presión de la opinión especializada e incluso de la internacional.

El gobierno mexicano, por la herencia autoritaria propia de los gobiernos de la Revolución Mexicana encabezados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), hasta diciembre del año 2000 tenía poco contacto con la sociedad civil, la academia y la prensa, pues la información que se autorizaba para el debate público era contradictoria, limitada y frecuentemente –es el caso del combate a las organizaciones criminales–, se amparaba en las cláusulas de seguridad nacional para no tener que informar.¹¹ Así, los mexicanos se documentan a través de “filtraciones” de documentos que hacen los propios funcionarios –muchas veces deliberadamente autorizadas por sus superiores–, de seguimientos de los medios de comunicación –por ejemplo, el conteo de ejecuciones que realizan cuatro periódicos con gran detalle y mérito–, y lo más grave: la información que tiene la mayor credibilidad es aquella hecha pública desde el extranjero, principalmente en Estados Unidos. Esto ha sucedido con la Iniciativa Mérida, en que la información proviene de la parte estadounidense principalmente. En el seno del gobierno mexicano son comunes también las rivalidades y competencias interinstitucionales; y no existe una centralización de la información sobre el narcotráfico, los cárteles y en general la seguridad nacional, lo que da pie a grandes confusiones, además de que también en muchas ocasiones la prensa compite por enfatizar las “notas rojas” y se hace aparecer al país como un Estado incapaz, o incluso hasta fracasado.

⁸ Héctor Aguilar Camín, ponencia en los “Diálogos por la seguridad”, México, Presidencia de la República, 3 de agosto de 2010.

⁹ Joaquín Villalobos, “Doce mitos de la guerra contra el narco”, www.nexos.com, 1º de enero de 2010.

¹⁰ Felipe Calderón “La lucha por la seguridad pública”, junio de 2010, en www.presidencia.gob.mx/prensa/lucha_seguridad_publica/

¹¹ La Ley de Seguridad Nacional emitida en 2005 contiene una cláusula de “Seguridad Nacional”, mediante la cual las instituciones del gobierno pueden negarse a otorgar información a la ciudadanía, la prensa o la academia. En los hechos, esta cláusula nulifica los avances logrados en la Ley de Acceso a la Información Pública Gubernamental de 2002 en los temas concernientes a seguridad nacional y defensa. Se ha estado intentando reformar esta ley desde 2008 en el Senado y la Cámara de Diputados, sin éxito.

En los “Diálogos por la Seguridad”, del 3 de agosto de 2010, el sector académico demandó al presidente Felipe Calderón que el gobierno mantuviera informada de manera frecuente y coherente a la sociedad civil, sobre el resultado de esa guerra. Los académicos presentes mostraron pruebas sobre las grandes contradicciones informativas y estadísticas que publicaban las distintas instituciones del gobierno, debido a la falta de centralización, esquema mediante el cual seis dependencias del gobierno federal proporcionaban cada cual su información, y ésta no tenía correspondencia con las otras fuentes oficiales, y menos aún con la divulgada por la prensa o las fuentes estadounidenses. A partir de dichos diálogos, en el portal electrónico de la Presidencia de la República comenzaron a publicarse los datos oficiales de los homicidios, desagregados hasta el nivel municipal, constituyendo una contribución muy importante para el análisis académico y para la prensa sobre el fenómeno criminal.

Respecto de los medios de comunicación y la sociedad civil, podemos decir que “No hay guerra que no se gane sin el respaldo de la población”. Este refrán es un mandato cuando de ciencia militar se trata. La población de México está asolada por el impacto real y mediático de la violencia, incluso en estados del país con índices bajos o con poca presencia de las organizaciones criminales. Con frecuencia el gobierno califica a los medios de ser irresponsables por ser amarillistas, buscar sólo la “nota roja”, o engrandecer el fenómeno del narcotráfico. La cobertura de los medios extranjeros también se encuadra en esta definición. Analizar cómo los medios de comunicación abordan el problema es un gran desafío. Sin embargo, también por el impulso mediático y por la creación de una imagen de “terror” que transmiten los medios sobre la acción de los cárteles es que muchos segmentos de la población respaldan al presidente en la aplicación de la estrategia de “mano dura”. Es decir, ante la imagen de expansión del terror criminal, la población respalda al único poder que podría frenar dicho terror, el Estado. Esto lo recoge claramente la Encuesta CIDENA 2011.

Respaldo institucional

Las cifras que se presentan a continuación, desprendidas de la Encuesta CIDENA 2011, ayudan a proponer la hipótesis de que el apoyo de la población al presidente, que por consecuencia revela que su trabajo es bien visto por la ciudadanía, tanto en su gestión de gobierno como por haber emprendido el combate a los cárteles de las drogas, se da por una psicología del desamparo y de la víctima. Todos los mexicanos temen ser víctimas de los criminales, y el presidente despliega una imagen de “dureza” por emplear los recursos de la milicia de forma abierta. Calderón cuenta con la opinión positiva del 58 por ciento de la población a nivel nacional y es desaprobado por el 20 por ciento. Además, en la evaluación del desempeño global de las instituciones castrenses su imagen en la opinión pública es aún mejor que la del presidente. El Ejército y la Marina son bien vistos por el 69 por ciento de los encuestados. También sobresale la confianza que le otorga la población al Instituto Federal Electoral, que es del 60 por ciento.

Por el contrario, las instituciones policíacas fueron juzgadas severamente por los encuestados. La Policía Federal obtuvo el respaldo de sólo el 49 por ciento, siendo rechazada por el 35 por ciento. En el caso del desempeño de las policías estatales la opinión favorable fue mínima, pues sólo las respaldan el 35 por ciento de los encuestados. Otras instituciones del Estado, como los diputados, senadores, la Suprema Corte de Justicia y las policías municipales tienen una aprobación incluso inferior. La Suprema Corte de Justicia y los diputados el 34 por ciento, los jueces el 31 por ciento y los senadores el 27 por ciento. Los gobernadores tienen el apoyo del 56 por ciento de los encuestados; son los únicos que se acercan al presidente.

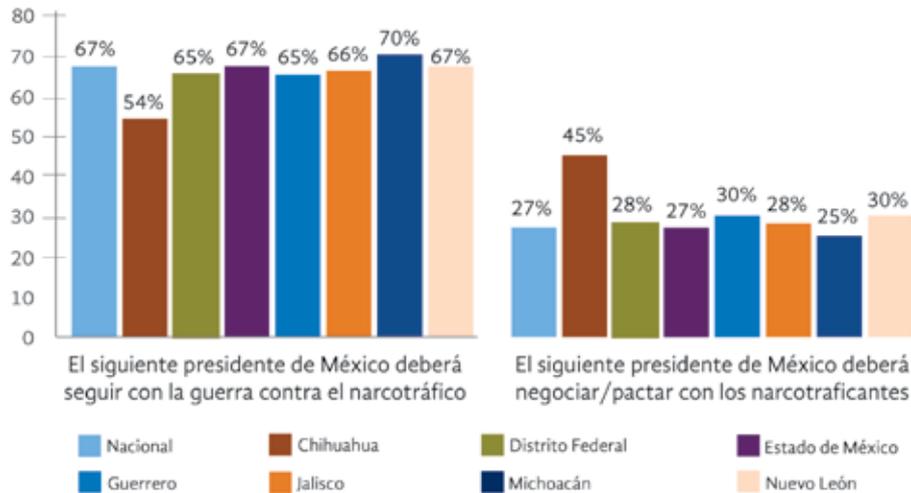
Lo anterior no es una sorpresa. Numerosas encuestas de opinión levantadas a lo largo de los últimos diez años han mostrado información similar. Incluso a nivel de la llamada confianza institucional, las tres instituciones líderes en el país que encabezan la imagen positiva de la población son las universidades, las iglesias y los militares, en rangos que van del 65 al 80 por ciento de la población en cada caso. El liderazgo entre ellas tres oscila según la coyuntura que se viva en el momento de los levantamientos de información, o cuando algún hecho negativo o un escándalo haya afectado a alguna de ellas cuando se recaba la información.

En el lado negativo, de igual manera no sorprende a nadie que las policías estén entre las peores instituciones evaluadas por la ciudadanía, y que los representantes populares en las dos cámaras del Congreso de igual manera registren opiniones similares. En el primer caso, al ser la policía uno de los primeros puntos de contacto entre la población y el Estado, por su ineficiencia, el crecimiento de la delincuencia y la elevada corrupción, de la cual todos los ciudadanos tienen experiencias personales desagradables, la institución y sus integrantes son mal evaluados. Los representantes legislativos han sido castigados por la ineficiencia en la emisión de leyes, la imagen de que los debates parlamentarios parecen en ocasiones un *ring* de boxeo, y la percepción que tienen los ciudadanos de “los políticos” en general, observándose un desencanto con *la política* y *los políticos*, por no resolver los problemas del país. Más aún, debido a que en las campañas políticas a la población le prometen la superación mágica y rápida de todos los problemas del país, y al ocupar los asientos legislativos los candidatos no vuelven a acercarse a los ciudadanos, se tiene la idea de que pasan a disfrutar del poder sin responsabilidad. La política es vista por la población como un medio para el enriquecimiento, más que como un servicio o vocación del político hacia la población.

La guerra al narcotráfico y la opinión pública

La Encuesta CIDENA 2011 formuló, asimismo, preguntas referidas a la opinión de la población sobre la continuidad de la guerra al narcotráfico: el 67 por ciento se manifestó favorable a que “el próximo presidente de México deberá seguir con la guerra contra el narcotráfico”; y el 27 por ciento se mostró en contra, con una respuesta sorprendente, declarándose a favor de que se negocie con los cárteles.

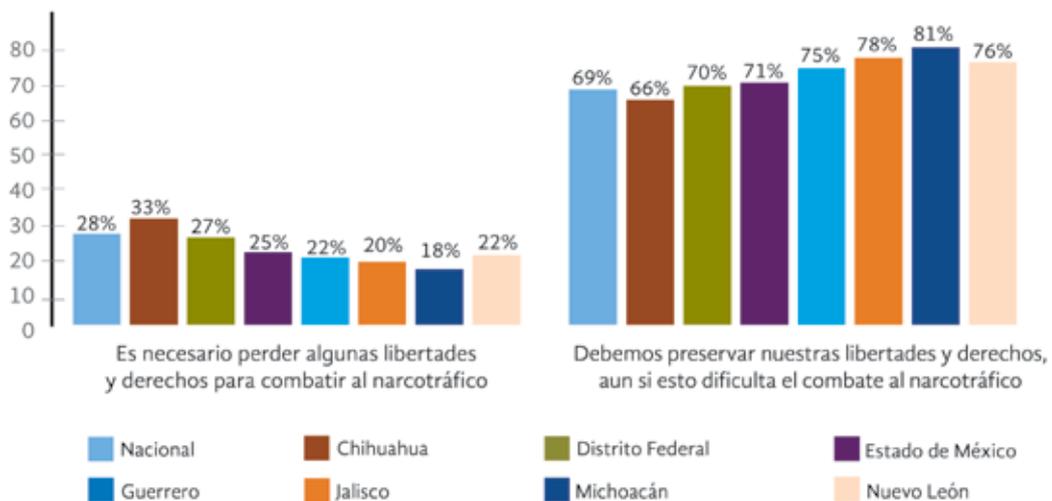
Cuadro 3
El próximo presidente de México, ¿debe seguir el combate o debe negociar con el narcotráfico?



Con la respuesta No sabe, No contesta suma 100%

Sin embargo, y muy importante para los cuestionamientos que se realizan al gobierno y los cuerpos de seguridad sobre las tácticas empleadas en la guerra contra narcotráfico, es que sólo el 28 por ciento de los encuestados señaló que es necesario perder algunas libertades y derechos para emprender esta guerra, mientras que el 69 por ciento sostuvo que se deben preservar las libertades y derechos, aunque se dificulte la misma.

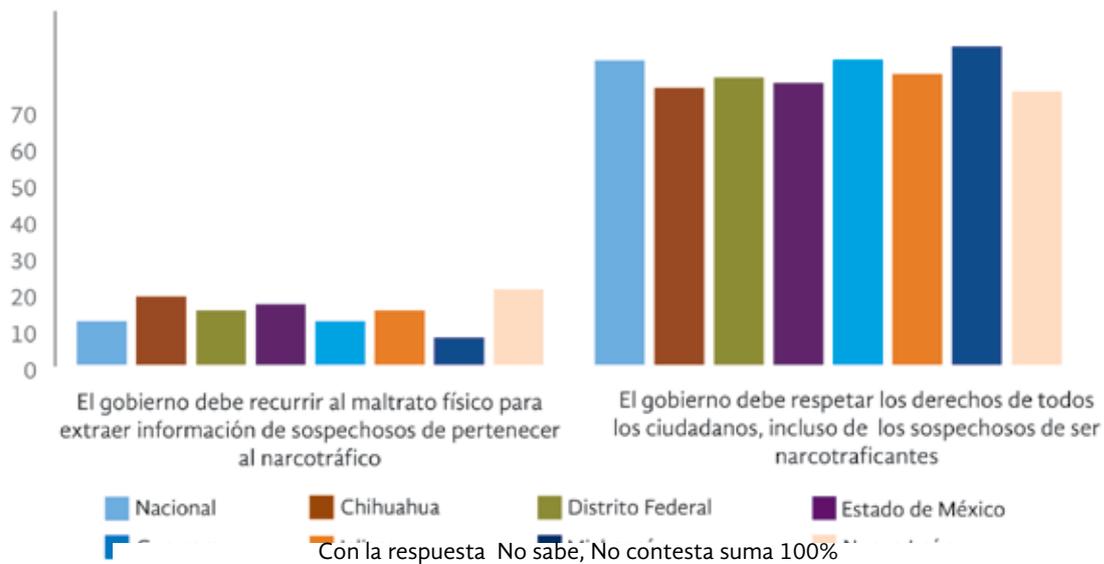
Cuadro 4
Algunas personas dicen que para acabar con el narcotráfico en México va a ser necesario perder algunas libertades y derechos



Con la respuesta No sabe, No contesta suma 100%

Sobre este mismo aspecto, destaca en la encuesta la sensibilidad de la población sobre los derechos humanos, pues el 86 por ciento de los encuestados señaló que el gobierno debe respetar los derechos de todos los ciudadanos, incluidos los sospechosos de ser narcotraficantes. Por el contrario, sólo el 12 por ciento justificó que el gobierno debe recurrir al maltrato físico para extraer información de las personas sospechosas.

Cuadro 5
El gobierno, ¿debe recurrir al maltrato físico o respetar los derechos humanos?



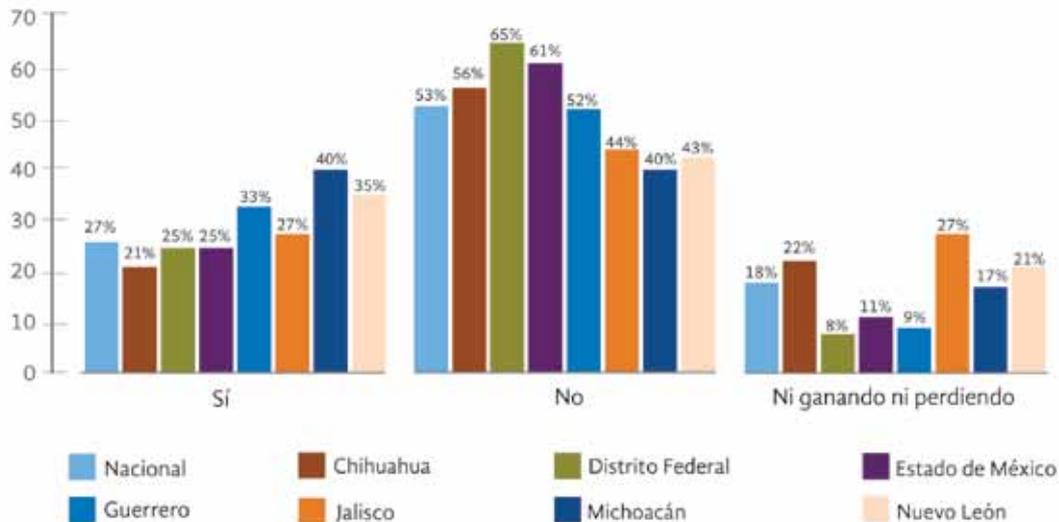
Los datos anteriores revelan, por un lado, que la población acepta a las fuerzas armadas y que la buena imagen presidencial no ha disminuido sustancialmente, a la par de que opina que se deben resguardar las libertades. Por otro lado, es claro que un importante segmento de la sociedad civil, como los académicos, cuya máxima expresión es el documento elaborado por la UNAM convocando a un pacto nacional en contra de la violencia;¹² los líderes de los movimientos sociales y de víctimas; y las opiniones de las élites políticas, empresariales y eclesiásticas, no concuerdan con la estrategia presidencial debido al incremento de la violencia y a los agravios de derechos humanos cometidos en los operativos por las fuerzas policíacas y militares.

Muchas encuestas revelan también posturas y pensamientos contradictorios que sobresalen en la población. En el caso de la Encuesta CIDENA 2011 esto fue evidente en relación con la evaluación que hacen los mexicanos sobre la guerra al narcotráfico. Lo

¹² “Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia”, UNAM, México, agosto de 2011.

anterior contrasta con el respaldo positivo al presidente, pues al mismo tiempo que se está de acuerdo con la estrategia presidencial y con el desempeño de las fuerzas armadas, la población encuestada a nivel nacional que señaló que sí se está ganando la guerra fue tan sólo del 26 por ciento, mientras que el 53 por ciento tiene la opinión de que se está perdiendo.

Cuadro 6
En su opinión, ¿el gobierno está ganando o perdiendo la guerra contra el narcotráfico?



Con la respuesta No sabe, No contesta suma 100%

En los desagregados de la información que presenta la encuesta en siete estados del país es interesante destacar que es en el estado más golpeado por la violencia, Chihuahua, donde menor percepción de triunfo tiene la población, con el 21 por ciento. Otros estados donde hay altos índices de violencia criminal tienen una percepción más elevada que la media nacional, como Guerrero, con el 33 por ciento, y Nuevo León, con el 35 por ciento. El estado que más elevada percepción tiene de que se va ganando la guerra es Michoacán, con el 40 por ciento de la población a favor.

Mitos y realidades

La realidad de la violencia criminal, con alrededor de 50 mil muertos producto de los enfrentamientos, lleva a México a muchos dilemas: ¿por qué un gobierno debe cambiar una estrategia si la población la apoya?; ¿cuáles son los indicadores que sirven para evaluar dicha guerra?; ¿es el sólo hecho del incremento de víctimas razón suficiente para hablar de un *fracaso*, como lo sugieren la opinión especializada en la academia y la prensa, así

como numerosas agrupaciones de la sociedad civil? Todas estas son preguntas abiertas sobre las cuales la Encuesta CIDENA 2011 ofrece información empírica valiosa, pero resulta claro que hay muchos mitos alrededor de esta guerra, entre ellos que las élites políticas darán un viraje a la actual estrategia gubernamental –o a partes de ella–, sobre todo cuando la percepción de temor de la población lleva a buscar a los protectores, sean militares, policías, o la llamada por la ciencia política y la sociología la “Fuerza del Estado”.
